

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2470/2011
QUEJOSO: *****

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
SECRETARIO: JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al dieciocho de enero de dos mil doce emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo directo en revisión 2470/2011, promovido por *****, contra la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil once por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo penal *****.

I. ANTECEDENTES

1. Para comprender el inicio del proceso penal incoado contra el quejoso, es útil partir de los diversos informes que durante junio de dos mil ocho rindieron dos agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal —***** y *****— al encontrarse investigando dos secuestros de personas.
2. En el curso de las investigaciones, tales policías obtuvieron diversos datos sobre los secuestradores con base en el rastreo de sus llamadas. De igual forma, colaboraron con las familias de las víctimas para rastrear las comunicaciones que efectuaban los secuestradores a fin de negociar un rescate. De esta forma, los

policías se allegaron de información acerca de los números telefónicos que detentaban los posibles secuestradores.

3. Con base en estos elementos, los policías investigadores localizaron a uno de los presuntos secuestradores. La forma de su detención (y la del resto de los inculpados) se encuentra narrada en el informe de puesta a disposición suscrito por el policía ***** el veintinueve de octubre de dos mil ocho a las veintitrés horas. En él señaló que, ese mismo día, se trasladó a la calle de Cuauhtémoc, frente a la iglesia del pueblo de Santiago Tepalcatlalpan delegación Xochimilco, donde logró ubicar a ***** (uno de los inculpados), quien fue encontrado en un puesto ambulante. A continuación, lo aseguró y entrevistó en relación con los hechos materia de investigación. De acuerdo con dicho informe, la persona detenida mencionó que su hermano era quien había participado en los dos secuestros investigados. De este modo, los policías procedieron a localizar al hermano (*****), quien una vez asegurado aceptó haber participado en los hechos y reveló la participación de otras personas (entre ellas el ahora quejoso).
4. Además, de acuerdo con el informe, ***** señaló que el ahora quejoso fue quien los contactó para realizar uno de los secuestros y mencionó que trabajaba como repartidor de la empresa ***** . Por este motivo, los policías realizaron una investigación al centro de trabajo del quejoso, en donde lo aseguraron. A continuación, hallaron que tenía en su poder uno de los teléfonos relacionados con la investigación.
5. Estos hechos dieron lugar a la instrucción de la causa penal ***** . Seguido el procedimiento por la vía ordinaria, se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes en la etapa de

instrucción, se declaró agotada y posteriormente el cierre de la instrucción, la representación social formuló sus conclusiones acusatorias, mismas que fueron contestadas por la defensa del acusado y se celebró la audiencia de ley y se dictó sentencia definitiva.

6. El doce de mayo de dos mil diez la Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Penal de la Ciudad de México, declaró al quejoso culpable del delito de secuestro previsto y sancionado en los artículos 163 y 164, fracciones III y IV, del Código Penal para el Distrito Federal.
7. Esto, al tener por probado que el siete de marzo de dos mil ocho, aproximadamente a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos, ***** (quejoso) y otros sujetos privaron de su libertad a ***** cuando se encontraba caminando sobre la calle *****.
En cuanto a la forma de comisión del delito, se tuvo por cierto que los sujetos activos amagaron a la víctima con armas de fuego y lo obligaron a subir a un vehículo con el fin de trasladarlo a una casa de seguridad ubicada en la calle *****, donde lo mantuvieron privado de su libertad vendado de los ojos, atado de pies y manos, hasta el veintidós de ese mismo mes y año. En relación con otra víctima de nombre *****, también se tuvo por probado que éste fue secuestrado por el quejoso el quince de abril de dos mil ocho en condiciones semejantes al secuestro antes relatado.
8. En consecuencia, se impuso al quejoso la pena de ciento cuarenta y seis años ocho meses de prisión y multa de seis mil seiscientos sesenta y seis días equivalentes a *****.
9. Inconforme con esta decisión, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, mismo que fue fallado el veinte de agosto de dos mil

diez por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca *****. Esta Sala decidió modificar la sentencia recurrida pero sólo en cuanto a la determinación del grado de culpabilidad del quejoso, cuestión que impactó en la determinación de su pena. Concretamente, ésta se redujo a ciento trece años cuatro meses de prisión y multa de tres mil trescientos treinta y dos días, equivalentes a *****. Por otro lado, la modificación consistió en absolver al hoy quejoso del pago de la reparación del daño y del resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

II. TRÁMITE

10. **Demanda de amparo.** El quejoso promovió juicio de amparo directo mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil once ante la Oficialía de Partes de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

Autoridad responsable:

La Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Acto reclamado:

La sentencia de veinte de agosto de dos mil diez dictada en el toca *****, por virtud de la cual se confirma la sentencia de primera instancia dictada en la causa penal ***** por el Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Penal en el Distrito Federal, por la comisión del delito de secuestro calificado (en dos ocasiones diversas).

11. En la demanda de amparo, el quejoso precisó que se violaron en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
12. **Resolución del juicio de amparo.** Remitida la demanda, el seis de mayo de dos mil once, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito admitió el juicio de amparo directo, lo registró bajo el número de expediente ***** y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público para que estuviera en posibilidad de formular el pedimento respectivo. Finalmente, por sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil once, el Tribunal Colegiado negó el amparo.
13. **Interposición del recurso de revisión.** En desacuerdo con el fallo anterior, el quejoso promovió recurso de revisión mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil once ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Por acuerdo del catorce de octubre de dos mil once, el Presidente del referido Tribunal Colegiado ordenó la remisión del asunto a esta Suprema Corte para la substanciación del recurso de revisión, con la mención de que en la sentencia recurrida no se decidió sobre la constitucionalidad de algún precepto, ley federal o local, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República o reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los Estados, ni se estableció interpretación directa de algún precepto constitucional.
14. **Trámite del recurso principal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** Mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil once, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación

tuvo por recibido el expediente y lo registró bajo el número 2470/2011. Señaló que la Primera Sala debía conocer del asunto, en atención a lo dispuesto por el artículo 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues del análisis inicial que correspondía del escrito de agravios se advertía que el recurrente se dolía de la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.¹

15. El diez de noviembre de dos mil once, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el avocamiento para el conocimiento del recurso de revisión. Asimismo, por razón de turno, designó como ponente al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de resolución.
16. **Cuestiones necesarias para resolver el asunto.** A continuación, se sintetizan los conceptos de violación, la resolución del Tribunal Colegiado y los agravios expresados por el quejoso.
17. **Conceptos de violación.** Por lo que hace a este rubro, esta Primera Sala destaca los siguientes argumentos planteados por el quejoso:
 - **Primero.** El quejoso señaló que se violó en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que sin fundamento legal alguno la autoridad responsable determinó que, al llevar a cabo el reconocimiento de su voz en la cámara de Gesell, no era necesaria una formalidad específica, pues no

¹ Esencialmente, en cuanto al pronunciamiento sobre la autenticidad de las grabaciones que lo implicaban en la comisión del delito, así como en la obtención y valoración de conversaciones telefónicas obtenidas por el Ministerio Público.

fue una diligencia de confrontación o de inspección ministerial y no era indispensable que se asentara fe de ello o que hubiera intervención de un perito.

Aunado a lo anterior, afirmó que existieron diversas diligencias practicadas por el Ministerio Público que son contrarias a derecho pues contienen vicios formales que debieron observarse durante la averiguación previa.

Por otro lado, resaltó que conforme al principio de inmediatez procesal, las primeras declaraciones que rindió son las que merecen mayor crédito, pues por su cercanía con los hechos se consideran generalmente veraces por no haber existido tiempo para que quien las produce reflexione sobre la conveniencia de alterar los hechos.

De todo lo anterior, concluye que todas las diligencias ministeriales deben ser consideradas nulas de pleno derecho, máxime que no debe considerarse a la prueba circunstancial como el medio que permita aglutinar pruebas deficientes o imperfectas.

- **Segundo.** Consideró que las conversaciones telefónicas que fueron grabadas por la policía judicial relacionadas con los acusados, sin que previamente se contara con una orden judicial para ello, son pruebas ilícitas que carecen de todo valor probatorio, aunado a que no se determinó pericialmente que las voces efectivamente pertenecieran al quejoso.

Expresó que la intervención de los medios de comunicación privada está permitida como una estrategia para combatir el

crimen organizado, por lo que únicamente la autoridad judicial federal puede autorizar su intervención, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la autoridad federativa correspondiente. Consecuentemente, dichas pruebas tuvieron que haber sido declaradas nulas por la autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción IX de la Carta Magna.

En este mismo sentido, señaló que por falta de orden judicial previa, debió declararse nulo el informe rendido por el técnico policial de investigación cibernética, el cual revisó los teléfonos celulares que les fueron asegurados a los acusados, para saber el contenido exacto de las llamadas recibidas, llamadas perdidas, llamadas realizadas, mensajes de salida y entrada, directorio telefónico, así como archivos de imagen y sonido. Aunado a que el citado policía no era agente federal, por lo que se encontraba impedido para intervenir teléfonos celulares.

Por otro lado, indicó que si en la época en la que la autoridad responsable emitió la resolución impugnada, aún no existía disposición expresa que facultara al Ministerio Público Federal a solicitar a empresas de telecomunicaciones información sobre números telefónicos sin una orden judicial para ello, el Ministerio Público del fuero común que integró la averiguación previa no estaba facultado para solicitar información a dichas empresas sin control judicial previo, por lo que se violó en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, pues del precepto 20, apartado A, fracción IX, se desprende que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales debe ser considerada nula.

- **Tercero.** El quejoso manifestó que los policías judiciales que lo detuvieron, lo retuvieron por un lapso de once horas, más tiempo del que resultaba racionalmente necesario, en atención a las circunstancias propias de distancia y disponibilidad de traslado, por lo que resulta inconcuso que dicha detención prolongada genera presunción fundada de que se le tuvo incomunicado y sufrió afectación psíquica y, por ende, sus confesiones respecto de los hechos que se le imputan carecen de validez, ello en atención al cuarto párrafo, del artículo 16 Constitucional.
- **Cuarto.** Indicó que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no haber dejado constatado que las pruebas de la averiguación previa se contraponen entre sí.
- **Quinto.** Finalmente, señaló que se violó en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, toda vez que los informes de las empresas de telecomunicaciones fueron recabados sin control judicial, por lo que la autoridad responsable no contaba con indicios suficientes para demostrar que el quejoso efectivamente fue el autor de los delitos que se le imputan.

18.

Sentencia recurrida. El tribunal colegiado que conoció del asunto declaró infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. A continuación, se sintetizan las razones que adujo:

- En primer lugar, el tribunal colegiado consideró que resultaba infundado el agravio por virtud del cual el quejoso buscaba invalidar las declaraciones de sus cosentenciados. De acuerdo con el quejoso, éstas eran inválidas en virtud de que habían sido obtenidas en el transcurso de una detención prolongada de once

horas, en la que existió coacción psíquica y coacción moral contra los declarantes.

- El tribunal colegiado arribó a dicha consideración al estimar que de autos no se advertía que los sentenciados o el quejoso hubieran sufrido alguna afectación psíquica con posterioridad al momento en que fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal. Consideró que lo anterior era así, no obstante que en las ampliaciones de declaración ante el Juez de la causa los policías hubieren señalado que después del medio día del veintinueve de octubre de dos mil ocho detuvieron a ***** y posteriormente fueron asegurando a los demás inculcados, hasta que ***** (quejoso) fue detenido después de las seis de la tarde en ese día.
- Lo anterior —mencionó— no es motivo suficiente para sostener que los detenidos hayan sido retenidos por más tiempo del necesario y que con eso se haya generado una afectación psíquica en cada uno de los detenidos, ya que la forma en que se les aseguró fue con el fin de ubicar a todos los inculcados, al encontrarse en diferentes lugares. Asimismo —agregó— eso tampoco influyó para que todos los inculcados hubieran confesado los hechos, ya que únicamente lo hicieron el quejoso y el sentenciado *****.
- Con ello, para el Tribunal Colegiado se demostró que, contrario a lo alegado por el quejoso, no existió ninguna afectación. El hecho de que los detenidos hayan sido puestos a disposición de la autoridad ministerial después de las veintitrés horas de ese mismo día, no pugna con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, pues no existe una forma lógica de medir en

horas o minutos los términos “inmediatamente”, “sin demora” o “sin dilación”, a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 16.

- El tribunal colegiado continuó diciendo que la valoración correspondiente tiene que apreciarse en conciencia de las circunstancias particulares del caso, que en la especie fue ubicar a todos y cada uno de los inculpados a partir de que fue detenida la primera persona. Por lo anterior, dicho órgano estimó que no existía vulneración alguna en la esfera de las garantías del quejoso.
- En cuanto a la apreciación del tiempo transcurrido para la puesta a disposición ante el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado consideró ilustrativa una tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro dice: FLAGRANTE DELITO. CONCEPTO DEL TÉRMINO "INMEDIATAMENTE", EN LA TERCERA HIPÓTESIS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 69 REFORMADO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).²

² Novena Época, Registro: 202971, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, Materia(s): Penal, Tesis: XXI.1o.5 P, Página: 946.

Su texto dispone: “El artículo 16 de la Constitución Federal dispone que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por su parte, el precepto 69, vigente a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, establece que existe delito flagrante: a) cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito; b) cuando es detenida después de ejecutado pero es perseguida materialmente; o c) cuando es detenida inmediatamente después de haberlo cometido y alguien la señala y se encuentra en su poder el objeto del mismo o el instrumento con que aparezca cometido, o aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su culpabilidad. Ahora bien, el término inmediatamente, que se emplea en esta última hipótesis de la existencia de delito flagrante, debe entenderse, como el lapso de tiempo comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el momento de la detención (cuando no aconteció persecución material); lapso de tiempo que debe ser continuo y breve, que casi no haga necesaria la investigación, ya que la

- En otro tema, el tribunal colegiado consideró que el quejoso carecía de razón al considerar que se debió haber solicitado la presencia de un perito que corroborara su voz con la que obraba en las grabaciones. Para el Tribunal, ello no era necesario toda vez que los ofendidos lo habían reconocido expresamente y que, en todo caso, el quejoso fue quien debió ofrecer esa prueba.
- Asimismo, el Tribunal Colegiado consideró que resultaba infundado el argumento del quejoso en el sentido de que se violaban las formalidades del procedimiento por el hecho de que dentro de las ampliaciones de declaración ministerial de los agraviados y los testigos, se hubiere realizado el reconocimiento de voz sin que al calce de las audiencias constaran las firmas del representante social, oficial secretario, policías judiciales, quejoso y demás personas que intervinieron en ellas.
- Para argumentar esta posición, el Tribunal Colegiado consideró que tal omisión no era suficiente para sostener que se hubieran violado las formalidades del procedimiento; lo anterior, al estimar que las diligencias que en la averiguación previa desahogó el Representante Social son continuas; además, consideró que el hecho de que en cada una de ellas no se encontrara su rúbrica, no implicaba que carecieran de eficacia probatoria, ya que al

cercanía en el tiempo entre el momento en el que se comete el ilícito y el momento en que ocurre la detención, permiten a cualquier persona presumir, en base al señalamiento y a los hechos que tiene a la vista, que la persona que se detiene es la culpable. En otras palabras, en esta hipótesis, así como en las otras dos, por la cercanía entre ambos momentos, primero se detiene a la persona que se presume culpable y posteriormente el Ministerio Público inicia la averiguación, una vez que ha sido puesta a su disposición la persona detenida; atento a lo dispuesto por la segunda parte del segundo párrafo del citado artículo 69. Cabe observar, que no es factible definir el término "inmediatamente" en minutos, horas o incluso días, porque en cada caso en particular debe apreciarse en conciencia, el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del caso."

cierre de las actuaciones obraba la firma tanto del Ministerio Público como de su oficial secretario.

- En otro aspecto, el Tribunal Colegiado consideró que resultaba infundado el argumento del quejoso en el sentido de que la grabación de las negociaciones por comunicaciones telefónicas constituía una prueba ilícita. También descalificó las aseveraciones del quejoso en el sentido de que la intervención de los medios de comunicación privada únicamente está permitida como estrategia para combatir el crimen organizado y sólo la autoridad judicial federal puede autorizar la intervención.
- El Tribunal Colegiado arribó a dicha determinación al considerar que las conversaciones telefónicas que fueron grabadas por elementos de la policía judicial no eran pruebas ilícitas. Lo anterior —apuntó— en virtud de que una prueba ilícita es aquella en la que su obtención implica la vulneración de derechos fundamentales, cuestión que en el caso no se actualizó.
- Agregó: aun cuando la revisión de los autos de la causa penal permite concluir que, efectivamente, no existió orden judicial para grabar las llamadas telefónicas, ello de ninguna forma vulnera garantías individuales del quejoso, ya que el origen de las cintas de grabación derivan del mandato que, en términos del artículo 21 constitucional, realiza el Ministerio Público que previno del secuestro; esto, aunado al consentimiento de los ofendidos, particularmente el padre de la víctima. No debe perderse de vista que, en virtud de la naturaleza del delito de secuestro y con el fin de salvaguardar la vida del secuestrado, resulta primordial que la autoridad ministerial y policíaca se avoquen de inmediato al esclarecimiento de los hechos, al

encontrarse en peligro el bien jurídico máspreciado por el ser humano que lo es la vida.

- Por otro lado, el Tribunal Colegiado también calificó como infundado el argumento en el cual el quejoso señaló que no debía otorgarse valor probatorio al informe técnico policial de investigación cibernética suscrito por el agente de la policía judicial ***** (del cual se advertía la utilización de un software para intervenir los teléfonos celulares asegurados a todos los inculpados, con el fin de saber el contenido de las llamadas recibidas, perdidas, realizadas, mensajes de salida y entrada.) Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró que no asistía razón al quejoso al aseverar que era incorrecto que se diera valor a dicho informe, en términos de los artículos 255 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por el hecho de no estar precedido de una orden judicial.
- Concretamente, dicho órgano colegiado consideró que ese medio probatorio comprobó que los sentenciados sostenían diversas comunicaciones entre ellos, pues dentro de las agendas telefónicas existían los números de celulares de cada uno de ellos, por lo que dicho informe no podía tildarse de nulo, aunado a que no existió ninguna intervención de comunicación privada, pues el análisis de los aparatos telefónicos lo realizó el especialista después de que fueron detenidos los inculcados, quien rindió su dictamen a petición de la Representación Social, para el efecto de que sirviera de un medio de convicción más dirigido a robustecer la participación de inculcados.

- En cuanto a los alegatos del quejoso dirigidos a combatir la validez de los informes expedidos por las empresas de *****, el Tribunal Colegiado también los calificó como infundados. Al respecto, consideró que no resultaba necesario que la solicitud de los informes debía estar precedida por una intervención judicial por parte de un Juez Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones Privadas, ya que, en primer lugar, en la época en que ocurrieron los hechos (marzo y abril de 2008), no existía la denominación de esos juzgados y, en segundo, porque tales actos no constituían una intervención telefónica en la que tuviera que mediar la aprobación judicial. Únicamente se trató de un informe que, a solicitud del Ministerio Público y en términos del artículo 21 constitucional, fue requerido para la obtención de los números telefónicos, desde donde fueron realizadas las llamadas con las que el aquí quejoso solicitaba y presionaba a los familiares de las víctimas para la obtención del rescate.
- Por otro lado, el quejoso consideró que, contrario al dicho del quejoso, desde el dieciocho de junio de dos mil ocho existían jueces que resolverían de forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación y que eso debía ser conocido por la autoridad responsable. Lo anterior, ya que tal cuestionamiento no puede aplicarse a favor del quejoso, pues los hechos ocurrieron el siete de marzo y quince de abril de dos mil ocho, y a partir de esas fechas la autoridad ministerial intervino y solicitó los informes a las empresas de telefonía, apoyándose principalmente en los artículos 14, 16, 17 y 21 constitucionales vigentes en esas fechas; es decir, antes de las reformas a la Constitución que

señala, por lo que no existió ningún perjuicio contra el peticionario de amparo.

- Sobre este mismo tema, el Tribunal Colegiado concluyó que no existía alguna violación al derecho de confidencialidad por el hecho de que obraran los informes de Teléfonos de México, ya que —consideró— esos informes no detallan el contenido de todas las llamadas, sino únicamente el número telefónico al que se marcó, por lo que son supuestos distintos que no perjudican la esfera jurídica.
- En relación con otro agravio, el Tribunal Colegiado consideró que no asistía la razón al quejoso en señalar que, tanto la inspección ministerial como el dictamen en materia de criminalística de campo de treinta de octubre de dos mil ocho, debieron declararse nulas. Lo anterior —argumentó el tribunal— en virtud de que dicho dictamen demostró la existencia de la casa de seguridad en la que mantuvieron privados de su libertad a los ofendidos. Además, tanto la inspección ministerial como el dictamen ya referidos, de ninguna forma tuvieron que estar precedidas de una orden judicial como lo pretendió el quejoso. Esas diligencias fueron desarrolladas por la representación social y por peritos dentro de la averiguación previa y de ninguna manera se está en el supuesto de que se haya violentado la inviolabilidad del domicilio al ser un caso completamente distinto a la orden de cateo, en virtud de que incluso como el propio dictamen señaló, el inmueble fue abierto por vecinos que habitan los cuartos, por lo que no se está en el supuesto previsto en el artículo 152 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

- De igual forma, el Tribunal Colegiado afirmó que, contrario a lo que pretendía el quejoso, resultaba legalmente correcto que la sala responsable otorgara el valor jurídico a los informes de veintidós de abril de dos mil ocho, presentados por los agentes de la policía judicial del Distrito Federal (***** y *****) ante el Ministerio Público, en el cual informaron que intervinieron la conversación telefónica para la negociación del secuestro de *****. No es acertado declarar su invalidez porque existió consentimiento de los familiares de las víctimas, para así lograr el esclarecimiento de los secuestros, por lo que fue correcta la adminiculación que realizó la responsable de las grabaciones y la fe ministerial con todo el caudal probatorio que obra en autos.
- Finalmente, a juicio del Tribunal Colegiado, la autoridad ordenadora tuvo adecuadamente demostrada la calificativa prevista en el artículo 164, fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal —que el delito se realice con violencia—. Por ello, adujo, el representante social fundada y motivadamente acusó al quejoso. No invalidez de que se otorgara valor probatorio a los informes telefónicos exhibidos por distintas empresas de telefonía. La validez del cateo a la casa de seguridad eventualmente asegurada, validez de su confesión ante el Ministerio Público, la cual consideró que se encontraba adecuadamente corroborada con otros datos.
- En cuanto a la responsabilidad penal del quejoso, el Tribunal Colegiado consideró que se tuvo acreditada su participación como coautor material en dos delitos de secuestro calificado.

19. **Agravios.** El quejoso combatió la sentencia de amparo a partir de los siguientes argumentos:

- **Primero.** El tribunal colegiado realizó una interpretación directa del cuarto párrafo del artículo 16 constitucional, al afirmar que no existía una forma lógica de medir en horas o minutos los términos “inmediatamente”, “sin demora” o “sin dilación” y que la valoración correspondiente tiene que apreciarse en conciencia de las circunstancias particulares del caso, que en la especie fue ubicar a todos y cada uno de los inculcados a partir de que fue detenida la primera persona. El quejoso consideró que esta interpretación era incorrecta dado que la Constitución no establece un solo caso que hable de la procedencia de la detención prolongada y, mucho menos, bajo este supuesto. En esa tónica —mencionó— el método lógico de que se valió el Tribunal emisor para entender el completo y auténtico sentido de la disposición constitucional en comento, hace procedente el recurso de revisión.
- **Segundo.** A juicio del quejoso, el tribunal emisor realizó la interpretación directa de los artículos 16 y 20 constitucionales, al resolver que no era necesaria la intervención del perito que corroborara su voz con las grabaciones y que, en todo caso, era a él a quien correspondía ofrecer esa pericial como prueba dentro de la instrucción.

El quejoso estimó que esta afirmación era incorrecta porque, si bien era cierto que tenía derecho de ofrecer la pericial para demostrar que su voz no correspondía con la de las grabaciones, también era verdad que las grabaciones fueron aportadas por la Policía Judicial del Distrito Federal. Entonces, para el quejoso, el tribunal colegiado tuvo que haber sustituido a la autoridad responsable y declarar la invalidez de dichas

grabaciones. Esto, porque el artículo 16 constitucional establece que las comunicaciones privadas son inviolables.

Además, subrayó, el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales es nula. Por consiguiente, el tribunal emisor no supo apreciar el contenido de dichos preceptos constitucionales.

- **Tercero.** En este punto, el quejoso advirtió que el tribunal *a quo* realizó la interpretación directa del artículo 14 constitucional, al afirmar que la falta de rúbricas del secretario y del Ministerio Público en las diligencias de reconocimiento de voz vía telefónica, no es suficiente para afirmar que no se cumplieron con las formalidades del procedimiento. Alegó que esta afirmación del tribunal colegiado era incorrecta porque vulneraba lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal³. Señaló que, para que las formalidades se cumplan, es necesario que todas las hojas en las que conste una actuación deben estar firmadas, pues son un signo gráfico representativo de que las mismas se realizaron con las formalidades de la ley.

³ Artículo 14. Todas las hojas del expediente deberán estar foliadas por el respectivo secretario, quien cuidará también de poner el sello correspondiente en el fondo del cuaderno, de manera que abrace las dos caras.

Todas las fojas del expediente en que conste una actuación, deberán estar rubricadas en el centro por el secretario, y si cuando se examine a un testigo quisiere éste firmar cada una de las fojas en que conste su declaración, se le permitirá hacerlo.

Si antes de que se pongan las firmas, ocurrieren algunas modificaciones o variaciones, se harán constar. Si ocurrieren después de haber sido puestas las firmas, se asentarán por el secretario y se firmarán por las personas que hayan intervenido en la diligencia.

- **Cuarto.** El quejoso añadió que el tribunal *a quo* realizó la interpretación de los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que las conversaciones telefónicas grabadas por la policía judicial, sin previa orden judicial, no constituían pruebas ilícitas porque no se violaba ningún derecho fundamental.

Para el quejoso, la interpretación del artículo 21 constitucional a la que arribó el Tribunal Colegiado es incorrecta porque esta disposición no dota al Ministerio Público de un poder omnímodo para que, de manera caprichosa, investigue y persiga delitos. Su actuar se encuentra delimitado por el artículo 16 constitucional, el cual señala en lo conducente que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley debe sancionar penalmente cualquier acto que atente contra ello.

Agregó que el artículo 20 constitucional establece un sistema tasado de valoración de pruebas y claramente señala que cualquier prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales será nula. En esta tónica, dichas grabaciones son pruebas ilícitas, nulas de pleno derecho en sí mismas y en sus frutos, pues no existió una orden judicial de por medio.

- **Quinto.** De acuerdo con el quejoso, el Tribunal Colegiado realizó la interpretación directa del artículo 16 constitucional, al resolver que no existió intervención de comunicaciones privadas cuando el policía de investigación cibernética ***** utilizó un software para intervenir los teléfonos celulares que fueron asegurados a todos los inculcados con el fin de saber el contenido de las llamadas recibidas, perdidas, realizadas, mensajes de entrada y salida. Para el quejoso, las consideraciones del órgano

colegiado fueron incorrectas porque en términos del artículo 16 constitucional, las comunicaciones privadas son inviolables y exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

Agregó que el precepto constitucional en cita fue aprobado en mil novecientos diecisiete, cuando para el constituyente no eran previsibles los avances técnicos de la electrónica, por lo que la Constitución se estaría interpretando mezquinamente si se ignoraran los avances de la tecnología para permitir la violación al derecho de privacidad.

Por este motivo —agregó— el artículo 16 establece que, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa que corresponda, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. En ese sentido, da lo mismo efectuar un cateo para apoderarse de una aseveración escrita, que interferir un teléfono para apoderarse del contenido de una aseveración oral.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal carece de facultades para crear policías de investigación cibernética, para que mediante el empleo o la utilización de software especializado intervengan teléfonos celulares con la calidad de informe técnico, siendo que la intervención de comunicaciones privadas sólo está disponible para el Ministerio Público de la Federación, previa autorización de la autoridad judicial federal.

- **Sexto.** El quejoso adujo que el tribunal colegiado realizó una interpretación directa del artículo 16 constitucional, al calificar de correcto que la autoridad responsable otorgara valor jurídico a los informes expedidos por las empresas de *****. Para el quejoso, lo anterior también es incorrecto a la luz del principio del artículo 16 que establece “las comunicaciones privadas son inviolables”. En consecuencia —aseveró— para requerir informes a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y a las empresas comercializadoras del servicio, es necesaria la autorización de la autoridad judicial federal, como una excepción al deber de confidencialidad, con independencia de si en la época en la que sucedieron los hechos, aún no se habían creado los jueces de control.

De lo contrario —afirmó— se llegaría al absurdo de considerar que la Constitución ignora ciertos derechos de los individuos, sólo porque en la época de los hechos aún no se habían creado los citados jueces de control y porque la Constitución aún no se había reformado. En rigor, el espíritu de la garantía protege la confidencialidad frente a las actividades del gobierno para que se pueda decir que se vive en libertad con dignidad y no en un Estado policiaco.

Adicionalmente consideró que los textos constitucionales y los textos internacionales de derechos humanos recogen el derecho a la intimidad como una manifestación concreta de la separación entre el ámbito privado y el público. En dicho contexto, el derecho a la intimidad impone a los poderes públicos, como a los particulares, diversas obligaciones, a saber: no difundir información de carácter personal entre los que se encuentran los

datos personales, confidenciales, el secreto bancario e industrial y en general en no entrometerse en la vida privada de las personas; asimismo, el Estado a través de sus órganos debe adoptar todas las medidas tendentes a hacer efectiva la protección de este derecho.

Asimismo, para el quejoso, la protección de datos personales alcanza los registros que tienen las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, tales como números telefónicos y detalles de llamadas. Por tanto, adujo, es falsa la afirmación del Tribunal Colegiado en el sentido de que no existió violación al derecho de confidencialidad al obrar informes expedidos por las empresas de *****, pues dichos informes fueron el origen directo e inmediato de las investigaciones, por lo que si las investigaciones tuvieron un origen viciado las demás pruebas que se le sumen también tienen esa calidad.

- **Séptimo.** En este punto, el quejoso combatió lo que estima como interpretación directa del artículo 16 constitucional que, a su entender, realizó el Tribunal Colegiado al señalar que fue correcto el valor que la responsable otorgó a la inspección y al dictamen en materia de criminalística de campo.

El quejoso consideró que esta respuesta fue incorrecta porque la Constitución señala de manera limitativa las excepciones a la inviolabilidad del domicilio; a saber: órdenes de cateo, visitas domiciliarias y la provisión a favor de militares en tiempo de guerra. La inspección y el dictamen en materia de criminalística, al ser diligencias desarrolladas por la representación social y por peritos dentro de la averiguación previa, no pueden ser consideradas como excepciones a la inviolabilidad del domicilio.

Contrariamente a lo señalado por el Tribunal Colegiado, se requería de orden de cateo para que dichas diligencias fueran válidas.

- **Octavo.** El quejoso alegó que el tribunal colegiado realizó la interpretación directa de los artículos 16 y 20 constitucionales, al calificar como legalmente correcto que se otorgara valor jurídico al informe presentado ante el Ministerio Público por los agentes de la policía judicial (***** y *****), en el cual informaron que intervinieron la conversación telefónica para la negociación del secuestro. Lo cual se relacionó con las grabaciones y la fe ministerial de audiocasetes, bajo el argumento de que existió consentimiento por parte de los familiares de las víctimas para así lograr el esclarecimiento de los secuestros.

Para el quejoso, la interpretación del tribunal colegiado fue incorrecta toda vez que el artículo 16 constitucional es claro en señalar que las comunicaciones privadas son inviolables, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.

En la especie —adujo— sucede que los agentes de la policía judicial fueron quienes escucharon y grabaron las conversaciones para liberación del secuestro de *****. Ellos fueron quienes aportaron las grabaciones, no los particulares que participaron en ellas. Así, estimó que dichos audios son nulos al haber sido obtenidos con violación a los derechos fundamentales.

- **Noveno.** En este punto, el quejoso buscó justificar la procedencia de su recurso y para ello se apoyó en la tesis aislada de esta Primera Sala cuyo rubro dice: “**REVISIÓN EN**

AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO REALIZA UNA INTEPRETACIÓN DE MANERA IMPLÍCITA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADOPTANDO COMO PROPIA LA REALIZADA POR UNA DE LAS PARTES Y DESESTIMANDO LA CONTRARIA”.⁴

Añadió que su confesión no podía adminicularse con otras pruebas en virtud de que, en suma, se dieron los siguientes vicios:

- La policía judicial intervino comunicaciones privadas sin orden judicial.
- La representación social, en compañía de peritos, realizó diligencias en el interior de un inmueble sin orden de cateo.
- El Ministerio Público realizó una diligencia de reconocimiento de voz, vía telefónica, dentro de las ampliaciones de declaración de los agraviados y de los testigos, sin que al calce de las mismas aparezcan las firmas del representante social, ni de las demás personas que participaron.

⁴ Sus datos de localización son: Novena Época, Registro: 176829, Instancia: Primera Sala

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CXI/2005, Página: 704

Su texto dispone: Por "interpretación directa" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo, no debe entenderse sólo aquella realizada expresamente al citarse y transcribirse el contenido de la norma constitucional a interpretar, sino también la interpretación efectuada de manera implícita al adoptar como propia la realizada por una de las partes en el juicio y desestimando la de la contraria, por considerarla errónea, incluso cuando no se cite ni se transcriba la norma constitucional, ni tampoco se expongan los motivos tomados en consideración para ello. Lo anterior es así, porque de lo contrario se dejaría al arbitrio del tribunal a quo la determinación de si realizó o no una interpretación directa de un precepto constitucional, pues bastaría que su resolución fuera dogmática, aun cuando ésta fuera contraria a alguna de las interpretaciones directas realizada por una de las partes, máxime si de esa interpretación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende la litis a resolver en el juicio de amparo."

Precedente: Reclamación 17/2005-PL. *****. 9 de marzo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.

- El Ministerio Público solicitó informes a las empresas de *****, sin mediar una intervención judicial, a pesar de que el espíritu del artículo 16 constitucional establece como derecho fundamental de la más alta categoría: el deber de confidencialidad.
- El policía de investigación cibernética ***** utilizó un software para intervenir teléfonos celulares con el fin de saber el contenido de las llamadas recibidas, perdidas, realizadas, mensajes de salida y entrada, siendo que la intervención de teléfonos para apoderarse de información sólo está disponible para la autoridad federal.

III. COMPETENCIA

20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto Transitorios del Acuerdo General número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno. El recurso fue interpuesto contra una sentencia pronunciada en amparo directo que no hace necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. OPORTUNIDAD DEL RECURSO

21. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida dictada el veintinueve de septiembre de dos mil once por el Séptimo

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se notificó por lista a las partes el siete de octubre del mismo año; por lo que surtió efectos al día siguiente hábil, es decir, el diez de octubre siguiente.

22. El término de diez días para la interposición del recurso previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del once al veinticinco de octubre de dos mil once. Deben descontarse los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del mismo mes, por tratarse de sábados y domingos y, por tanto, resultar inhábiles. Asimismo, debe descontarse el día doce de octubre por resultar inhábil en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si el recurso que nos ocupa se interpuso el trece de octubre de dos mil once ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, es claro que su presentación es oportuna.

V. PROCEDENCIA

23. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el presente recurso es procedente, en virtud de las siguientes consideraciones:
24. De la interpretación sistemática de los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General Plenario 5/1999, se deriva lo siguiente:

- a) Por regla general, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno. En principio, entonces, son inatacables.
 - b) Por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, a condición que decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos: **I.** La inconstitucionalidad de una norma, y/o; **II.** La interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal.
 - c) En caso de que se presente la situación descrita en el punto anterior, y para efectos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, además, deberán quedar satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia que, según dispone la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal condicionan la procedencia del recurso que nos ocupa.
 - d) El significado de los requisitos de “importancia” y “trascendencia” está especificado en el Acuerdo General plenario 5/1999, emitido en ejercicio de la facultad expresa prevista en el artículo 94, párrafo séptimo, de la Constitución Federal. Este acuerdo señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de amparo, así como cuando no se hubieran expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no hubiera que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.
25. Pues bien, en vista de los criterios citados, esta Sala estima que debe afirmarse la procedencia del recurso que nos ocupa. Tal como

lo advierte el quejoso en su escrito de agravios, el Tribunal Colegiado realizó la interpretación del artículo 16 constitucional para efectos de determinar si su detención había sido realizada en condiciones constitucionalmente admisibles.

26. En efecto, como se narró anteriormente, en la demanda de amparo el quejoso combatió el hecho de que su detención se hubiera prolongado por un lapso de once horas. Al respecto, el Tribunal Colegiado estimó que de los autos no se advertía que los sentenciados o el quejoso hubieran sufrido alguna afectación psíquica con posterioridad al momento en que fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal.
27. Lo anterior —mencionó— no es motivo suficiente para sostener que los detenidos hayan sido retenidos por más tiempo del necesario y que con eso se haya generado una afectación psíquica en cada uno de los detenidos, ya que se les aseguró de la manera en que se les aseguró para ubicar a todos los inculpados, quienes se encontraban en diferentes lugares. El hecho de que los detenidos hayan sido puestos a disposición de la autoridad ministerial después de las veintitrés horas ese mismo día, no pugna con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, pues no existe una forma lógica de medir en horas o minutos los términos “inmediatamente”, “sin demora” o “sin dilación”, a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 16.

VI. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

28. En vista de lo anterior, la pregunta central que esta Primera Sala debe contestar es si, tal como lo aseveró el Tribunal Colegiado, no existe una forma lógica de medir en horas o minutos los términos “inmediatamente”, “sin demora” o “sin dilación”, a que se refieren

los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 de la Constitución Federal.

29. En primer lugar, es necesario delimitar la hipótesis del artículo 16 de la Constitución Federal que concretamente se actualizaba en atención a la forma en la cual se realizó la detención del quejoso. Éste es el primer problema con el que nos enfrentamos toda vez que en la sentencia de amparo no se especifica bajo qué figura jurídica tuvo lugar la captura del encausado, pero de la argumentación que se expone pareciera dar por entendido que si la detención sin orden judicial estaba justificada por tratarse de un caso de flagrancia. Ello, porque al interpretar el término “sin demora” previsto en el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Federal, dicho tribunal afirmó que era aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de rubro “FLAGRANTE DELITO. CONCEPTO DEL TÉRMINO ‘INMEDIATAMENTE’, EN LA TERCERA HIPÓTESIS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 69 REFORMADO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).”⁵

⁵ Su texto dispone: “El artículo 16 de la Constitución Federal dispone que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por su parte, el precepto 69, vigente a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, establece que existe delito flagrante: a) cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito; b) cuando es detenida después de ejecutado pero es perseguida materialmente; o c) cuando es detenida inmediatamente después de haberlo cometido y alguien la señala y se encuentra en su poder el objeto del mismo o el instrumento con que aparezca cometido, o aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su culpabilidad. Ahora bien, el término inmediatamente, que se emplea en esta última hipótesis de la existencia de delito flagrante, debe entenderse, como el lapso de tiempo comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el momento de la detención (cuando no aconteció persecución material); lapso de tiempo que debe ser continuo y breve, que casi no haga necesaria la investigación, ya que la cercanía en el tiempo entre el momento en el que se comete el ilícito y el momento en que ocurre la detención, permiten a cualquier persona presumir, en base al señalamiento y a los hechos que tiene a la vista, que la persona que se detiene es la culpable. En otras

30. Sin embargo, de acuerdo con los hechos que se desprenden de la sentencia de apelación y de la sentencia de amparo directo, la hipótesis de detención no se actualizó en términos de la figura de “flagrancia”. Veamos por qué.
31. Respecto a la temática de justificación de las hipótesis de detención, permitidas por la Constitución Federal, como limitante a la garantía de no afectación de la libertad personal de los individuos, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo 14/2011, estableció los parámetros diferenciadores que operan en la detención por flagrancia o caso urgente.
32. Lo que precisó esta Sala, es que el artículo 16 constitucional consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales está —por supuesto— el derecho a la libertad personal.⁶ La estructura de este precepto constitucional se traduce en dos distintas formas de proteger los derechos: los dos primeros párrafos de dicho artículo los consagran positivamente,⁷ y los

palabras, en esta hipótesis, así como en las otras dos, por la cercanía entre ambos momentos, primero se detiene a la persona que se presume culpable y posteriormente el Ministerio Público inicia la averiguación, una vez que ha sido puesta a su disposición la persona detenida; atento a lo dispuesto por la segunda parte del segundo párrafo del citado artículo 69. Cabe observar, que no es factible definir el término “inmediatamente” en minutos, horas o incluso días, porque en cada caso en particular debe apreciarse en conciencia, el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del caso”.

Precedente: Amparo en revisión 313/95. ***** . 14 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Joaquín Dzib Núñez. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

⁶ “Libertad personal” es entendida aquí —al igual que en un amplio sector de la doctrina y los órganos del derecho internacional— como una categoría específica equivalente a la libertad de movimiento o libertad deambulatoria.

⁷ (REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)

Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE JUNIO DE 2009)

párrafos subsecuentes señalan las posibles restricciones a las mismas; es decir, en qué supuestos el Estado puede generar afectaciones válidas a este derecho y bajo qué condiciones.

33. En este sentido, se trata de dos formas de proteger los derechos, basada en la pretensión que subyace al hecho de que las limitaciones estén establecidas en la Constitución, dirigida a que funcionen como garantías de legalidad a favor de la persona, pues ordenan al Estado a que ciña su actuar a los confines de las atribuciones allí establecidas. Es decir, el Estado no puede limitar tales derechos en supuestos distintos a los previstos por la Constitución.
34. Para ello es importante la alusión al artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prohíbe las afectaciones al derecho a la libertad personal salvo por las condiciones y causas fijadas de antemano por la Constitución. Literalmente dispone: *“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.”*
35. **De ahí que deba estimarse que en materia de libertad personal, la norma fundamental también delimita exhaustivamente los supuestos que permiten su afectación (la orden de aprehensión, las detenciones en flagrancia y caso urgente).**

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Éstos y las formalidades que deben respetar se prevén del tercer al séptimo párrafo de artículo 16 constitucional:

“[...]”

No podrá librarse **orden de aprehensión** sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.⁸

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculcado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Estado existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

⁸ El texto de este párrafo anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho —texto aplicable a este asunto por no haber entrado en vigor al momento en que se dictó sentencia al inculcado— decía: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.” Vale la pena recalcar que éste es el único párrafo constitucional materia de análisis en este apartado que, para efectos de este caso, no puede tomarse como vigente, pues en términos del artículo segundo transitorio del decreto de reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, este párrafo forma parte del régimen acusatorio cuya entrada en vigor depende de la adecuación por parte de las legislaturas locales, con el tope de ocho años. No obstante esto, para efectos del análisis concerniente al derecho de libertad personal, es irrelevante el cambio en virtud de que este párrafo, tanto en su versión previa a la reforma como en su versión posterior, exige que sea la autoridad judicial quien emita la respectiva orden de aprehensión —punto esencial del desarrollo que se hará a continuación—.

En casos de **urgencia o flagrancia**, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
[...].”

36. A criterio de la Primera Sala el orden en que el constituyente permanente situó estos supuestos no es casual. **Por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión.** Los casos de flagrancia y urgencia son excepcionales; el primero porque, como se verá más adelante, para su configuración se requiere que, *de facto*, ocurra una situación particular y atípica; el segundo porque también requiere la actualización de condiciones apartadas de lo ordinario implicadas en la expresión: *“ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia”*.
37. **Así, el escrutinio de la autoridad judicial debe ser la condición rectora y preferente en el régimen de detenciones.** Es decir, en principio, toda detención debe estar precedida por una autorización emitida por un juez tras analizar si la solicitud de la autoridad ministerial para aprehender a un individuo, cumple con las formalidades requeridas por la Constitución.
38. ¿A qué obedece la posición preferente del escrutinio judicial en materia de detenciones? A que es el juez quien —por su posición de independencia orgánica y su función de contrapeso con respecto a los demás poderes del Estado— mejor puede cumplir con la encomienda de anteponer el respeto por el respeto de los individuos y dar eficacia a la Constitución. Mientras el Ministerio Público tiene el deber de perseguir el delito y, por tanto, tiene

interés en que las detenciones se ejecuten, la autoridad judicial tiene el llamado institucional de fungir como un contrapeso, esto es, como un tercero imparcial, capaz de invalidar detenciones contrarias a los derechos recogidos por la Constitución.

39. Esta deferencia al juez no es superflua. La función jurisdiccional es ejercida por servidores públicos cuyo ingreso, permanencia y ascenso está condicionado por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. En efecto, la formación del juez (integrante tanto del Poder Judicial de la Federación, como de la judicatura de los Estados de la República) está orientada a maximizar un perfil que reúna tales características.⁹
40. Ahora bien, la exigencia de que toda medida restrictiva del derecho a la libertad personal esté primordialmente autorizada por una autoridad judicial, no sólo está contemplada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también por la

⁹ Al respecto, el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la carrera judicial se debe regir por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Así mismo, el artículo 116, fracción III del mismo ordenamiento nos establece que la independencia de los magistrados y jueces (pertenecientes al Poder Judicial de los Estados) deberá estar garantizada, en el ejercicio de sus funciones, por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados. Refuerzan estos criterios las jurisprudencias de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". (P./J. 101/2000 , Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Octubre de 2000, Página: 32); "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. EN LA INTERPRETACIÓN DE SUS CONSTITUCIONES, EN LA PARTE RELATIVA A SU DESIGNACIÓN, DEBE OPTARSE POR LA QUE RESPETE LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". (P./J. 108/2000, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Octubre de 2000, Página: 13); y "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES". (P./J. 79/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, Página: 1188)

Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente por su artículo 7º, disposición a la cual hay que atender con motivo de la reforma al artículo 1º constitucional,¹⁰ de nueve de junio de dos mil once que obliga a todas las autoridades del país, incluida por supuesto esta Primera Sala a regir su actuar de conformidad con los derechos humanos garantizados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México forma parte. Dicho artículo señala literalmente lo siguiente:

“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

¹⁰ (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001)

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.”
41. Así, el escrutinio judicial en materia de detenciones es, por tanto, una especie de regla primaria, cuya ejecución debe ser privilegiada siempre que sea posible. No existe tal posibilidad cuando se actualizan los supuestos excepcionales previstos por el mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya se advertía, uno de ellos es el caso de **detenciones en flagrancia**.
42. La relevancia del tema obligó a esta Primera Sala a buscar un concepto claro y orientador de lo que debe entenderse por flagrancia como supuesto de justificación a la restricción de la garantía de libertad personal.

a. El significado constitucional de la flagrancia.

43. De esta manera, quedó claro que al revisar el reconocimiento histórico del concepto —como supuesto que autoriza la “detención ciudadana” esto es, la detención ejecutada por cualquier particular— descubrimos que ha estado inmerso en el texto constitucional desde su redacción original e incluso lo estuvo en la Constitución histórica de mil ochocientos cincuenta y siete. Su artículo 16 establecía:

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. **En el caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata.**”

44. Desde el texto original del constituyente de mil novecientos diecisiete, hasta la reforma del tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el artículo 16, en lo relativo, establecía:

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querrella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, **hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata.**”

45. De septiembre de mil novecientos noventa y tres, hasta antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, el cuarto párrafo del artículo 16 disponía:

“[...]

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

[...]”

46. Actualmente, el quinto párrafo del artículo 16 constitucional —apenas reformado en junio de dos mil ocho— prevé la siguiente descripción:

“[...]

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.¹¹

¹¹ Cabe anotar que este párrafo ya se encuentra en vigor, pues no se encuentra entre las excepciones a que se refiere el régimen transitorio de la reforma del dos mil ocho. Las únicas excepciones sobre el artículo 16 constitucional a la regla general de entrada en vigor (al día siguiente de la publicación del decreto) se encuentran contenidas en los artículos que a continuación se transcriben:

“D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

[...].”

47. Como se ve, la razón por la cual se reconoce a la flagrancia como supuesto que admite la detención sin orden judicial, no ha variado: resultaría absurdo impedir que los ciudadanos comunes pudieran detener a quien a todas luces está ejecutando un delito frente a ellos, perfectamente apreciable por los sentidos.
48. Aunque la figura siempre ha estado recogida por el texto constitucional, fue hasta la última reforma del dos mil ocho que el órgano reformador de la Constitución introdujo por primera vez una definición del concepto. Anteriormente sólo se preveía una especie de prerrogativa a favor del ciudadano y de la autoridad (de cualquiera, en realidad) para aprehender al autor de un delito en el caso de flagrancia. Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, en su Quinta Época, comenzó a

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.

Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo.

Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.”

generar interpretaciones sobre el alcance de su significado. Como se verá a continuación, ellas favorecieron un sentido restrictivo y literal del concepto. Destacan los siguientes criterios:

“FLAGRANTE DELITO. No debe confundirse el delito con las consecuencias del mismo; **delito flagrante es el que se está cometiendo actualmente**, sin que el autor haya podido huir: **"el que comete públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos, al tiempo mismo en que lo consumaba"**; por tanto, **considerar flagrante un delito porque se miren sus consecuencias, constituye un grave error jurídico**, y la orden de aprehensión que se libre por las autoridades administrativas, contra el autor probable del hecho que ocasiona esas consecuencias, constituye una violación al artículo 16 constitucional.”¹²

“FLAGRANTE DELITO. Las autoridades administrativas sólo pueden librar órdenes de aprehensión, en los casos de flagrante delito, y **no puede considerarse tal, si ha transcurrido ya un tiempo cualquiera, desde su comisión, y las autoridades tienen noticias de él por los informes de sus inferiores.**”¹³

“FLAGRANTE DELITO, CASO EN QUE NO PUEDE CONSIDERARSE QUE EXISTE. Si el presidente municipal y el inspector de policía de determinado lugar, informan que la detención del quejoso se debió a que recibieron una llamada telefónica para detener al quejoso, **quien trataba de cometer un delito y, que por eso fue detenido, es claro que aquél**

¹² No. Registro: 283,732, Tesis aislada, Materia(s): Penal, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XVII, Página: 478, Genealogía: Apéndice 1917-1985, Novena Parte, segunda tesis relacionada con la jurisprudencia 85, página 131. Su precedente es el Amparo penal en revisión 163bis/25. ***** . 21 de agosto de 1925. Mayoría de siete votos. Disidentes: Salvador Urbina y Jesús Guzmán Vaca. La publicación no menciona el nombre del ponente.

¹³ Sus datos de localización son: No. Registro: 281,940, Tesis aislada, Materia(s): Penal, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XX, Página: 175. Su precedente es el Amparo administrativo en revisión 1817/26. ***** . 19 de enero de 1927. Unanimidad de nueve votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

no fue aprehendido en flagrante delito y que la detención es violatoria de los artículos 14 y 21 constitucionales.”¹⁴

“LIBERTAD, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA. Aun cuando es verdad que conforme lo dispone el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda persona que, en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego a los inculpados, si hubieron sido detenidos, también es cierto que la parte final de este precepto, presupone incuestionablemente la existencia de un caso de flagrante delito, **cometido públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto y sorprendido por testigos, al tiempo mismo en que lo consumaba,** pues de lo contrario, una detención en diversas condiciones violaría los derechos consignados en el artículo 16 constitucional.”¹⁵

49. En síntesis, de acuerdo con la connotación acogida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época, un delito flagrante se configura cuando (y sólo cuando) se está cometiendo actual y públicamente, esto es, cuando el autor es visto y sorprendido por muchos testigos mientras consuma la acción, sin que pueda huir. Como criterio negativo tenemos que, en forma ejemplificativa, de acuerdo con esa interpretación de la Corte, una detención en flagrancia **no** es aquélla en la que se detiene con fundamento en una simple sospecha sobre la posible comisión de un delito.

¹⁴ Sus datos de localización son: No. Registro: 310,519, Tesis aislada, Materia(s): Penal, Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, LV, Página: 231. Su precedente es el Amparo penal en revisión 7128/37. *****. 12 de enero de 1938. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

¹⁵ Sus datos de localización son: No. Registro: 305,235, Tesis aislada, Materia(s): Penal, Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, LXXXIV, Tesis: Página: 1733. Su precedente es el Amparo penal directo 2041/45. *****. 10 de mayo de 1945. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

50. Así, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la connotación del término flagrancia tenía un sentido realmente restringido y acotado, en un claro favorecimiento del alcance del derecho a la libertad personal. No obstante, con el paso del tiempo, algunos órganos legislativos locales y el Congreso de la Unión adscribieron al concepto una connotación de mucha mayor amplitud que tuvo reflejo en los ordenamientos procesales penales —una que eventualmente dio lugar a la incorporación de la figura ampliamente conocida en la doctrina y la *praxis* como “flagrancia equiparada”—.
51. Esta acepción se distingue por admitir que el momento de la flagrancia comprende un número de horas completamente desvinculado con la inmediatez a la que originalmente apelaba el concepto, al menos según las primeras interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A modo de ejemplo conviene citar que en el caso de la legislación federal ese plazo equivalía, hasta antes de una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales de veintidós de enero de dos mil nueve, a cuarenta y ocho horas después de cometido el delito. La acepción encontraba sustento en el artículo 193, fracción III, de dicho código, en los siguientes términos:

“Artículo 193. Se entiende que existe flagrancia cuando:

- I. El inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito;
- II. Inmediatamente después de ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente, o
- III. **El inculpado es señalado como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere participado con él en la comisión del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en el delito; siempre y cuando se trate de un delito grave, así**

calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos, se haya iniciado la averiguación previa respectiva y no se hubiera interrumpido la persecución del delito.

[...].”¹⁶

52. Es crucial referir que el último cambio constitucional (el de la reforma de dos mil ocho) obedeció a la intención expresa de delimitar un concepto de flagrancia, erradicar la posibilidad de que en la legislación secundaria se introdujera la “flagrancia equiparada” y, con ello, evitar abusos contra la libertad deambulatoria de los individuos. La falta de especificidad en la descripción constitucional había generado un contexto que, durante el proceso de reforma, fue calificado como laxo o permisivo y expresamente se optó por su modificación.
53. Así lo manifestaron los distintos actores que impulsaron esta última reforma constitucional de junio de dos mil ocho. El consenso fue claro y amplio. Al respecto resulta útil referir algunas de las expresiones más evidentes de dicha voluntad.
54. El once de diciembre de dos mil siete, en la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia presentaron el dictamen que contenía el decreto de reforma constitucional con las siguientes consideraciones:

¹⁶ Actualmente, dicha fracción III establece:

“Artículo 193. Cualquier persona podrá detener al indiciado:

[...]

III. Inmediatamente después de cometer el delito, cuando la persona sea señalada por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito, o cuando existan objetos o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el delito. Además de estos indicios se considerarán otros elementos técnicos.”

“Honorable Asamblea:

Estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia [...] someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en las siguientes:

Consideraciones

[...]

Definición de flagrancia

El concepto de flagrancia en el delito, como justificación de la detención de una persona, sin mandato judicial, es universalmente utilizado, sólo que el alcance de ese concepto es lo que encuentra divergencias en las diversas legislaciones. Es aceptado internacionalmente que la flagrancia no sólo consiste en el momento de la comisión del delito, sino también el inmediato posterior, cuando se genera una persecución material del sujeto señalado como interviniente en el delito, de manera que si es detenido en su huida física u ocultamiento inmediato, se considera que aplica la flagrancia y por tanto, se justifica la detención.

Este alcance de la flagrancia no genera mayores debates, pero existe otra visión de la citada figura, que es la conocida como flagrancia equiparada, consistente en la extensión de la oportunidad de detención para la autoridad durante un plazo de cuarenta y ocho o hasta setenta y dos horas siguientes a la comisión de un delito calificado como grave por la ley, y una vez que formalmente se ha iniciado la investigación del mismo, cuando por señalamiento de la víctima, algún testigo o participante del delito, se ubica a algún sujeto señalado como participante en el ilícito penal, o se encuentran en su rango de disposición objetos materiales del delito u otros indicios o huellas del mismo, situación que los legisladores secundarios han considerado como justificante para detener a la persona sin orden judicial, y retenerlo para investigación hasta cuarenta y ocho horas, antes de decidir si se le consigna al juez competente o se le libera con las reservas de ley.

Si bien se entiende que la alta incidencia delictiva que aqueja a nuestro país ha generado la necesidad de

nuevas herramientas legales para la autoridad, de manera que pueda incrementar su efectividad en la investigación y persecución de los delitos, se estima que se ha incurrido en excesos en la regulación del concepto de flagrancia, al permitir la referida flagrancia equiparada, toda vez que **posibilita detenciones arbitrarias** por parte de las autoridades policiales, **cuando el espíritu de nuestra Constitución es que la flagrancia sólo tiene el alcance al momento de la comisión del hecho y el inmediato siguiente, cuando se persigue al indiciado.**

Bajo esta premisa, se juzga adecuado explicitar el concepto de flagrancia, señalando su alcance, que comprendería desde el momento de la comisión del delito, es decir el íter criminis, hasta el **período inmediato posterior** en que haya persecución física del involucrado. Consecuentemente, el objetivo es limitar la flagrancia hasta lo que doctrinariamente se conoce como "cuasiflagrancia", a fin de cerrar la puerta a posibles excesos legislativos que han creado la flagrancia equiparada, que no es conforme con el alcance internacionalmente reconocido de esta figura.

Lo expuesto se justifica si consideramos que el espíritu de la reforma es precisar a todos los habitantes del país los casos en que pueden ser detenidos por cualquier persona, sin tener una orden judicial y sin una orden de detención por caso de urgencia expedida por la autoridad administrativa, con la finalidad de no dejar resquicios para posibles arbitrariedades, más aun cuando se ha incrementado la posibilidad de obtener una orden judicial de aprehensión al reducir el nivel probatorio del hecho y de la incriminación.

En ese orden de ideas, se determina procedente delimitar el alcance de la flagrancia como justificante de la detención del involucrado en un hecho posiblemente delictivo, de forma que sólo abarque hasta la persecución física del indiciado inmediatamente después de la comisión del hecho con apariencia delictiva.”

55. En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados —enviado para su discusión y aprobación a la Cámara de Senadores— ya se incluía la descripción de la flagrancia que hoy está contenida en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional.

56. El trece de diciembre, en la Cámara de Senadores, se sometió a aprobación el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados; ahí literalmente se reiteraron las consideraciones enviadas por ésta y se concluyó que se coincidía con el concepto de flagrancia propuesto.
57. Posteriormente, en el contexto de la discusión sobre los allanamientos policiales al domicilio, en la Cámara de Senadores, el Senador Ulises Ramírez Núñez reiteró que era necesario abandonar toda posibilidad de que en las legislaciones secundarias se incluyera la descripción de “flagrancia equiparada”. Sus palabras literales fueron:

“Sólo para aclarar aún más respecto de la flagrancia, de la flagrancia que se refiere en la segunda parte del artículo que estamos discutiendo, es lo que se llama cuasiflagrancia, inmediateamente que se está cometiendo, se tiene conocimiento y se persigue y se puede detener, existe una categoría adicional que se está limitando y que se está dando en el país y es la flagrancia equiparada, con este artículo estamos limitando que esta flagrancia equiparada esté operando en varios estados del país, ¿qué significa? Que existe un plazo diferente en cada estado entre 42 y 70 horas para que después de que se cometió un delito, si aún perseguido se le encuentra algún objeto que utilizó producto de lo robado, pueda ser detenido. Eso se está limitando en este artículo...”

58. Un importante retrato de la práctica que se pretendió erradicar está expuesto en el Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, acerca de su visita a México en noviembre de dos mil dos (informe publicado el diecisiete de diciembre de dos mil dos).¹⁷ En él se analizaron las condiciones en las que México

¹⁷ El Informe puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/160/10/PDF/G0216010.pdf?OpenElement> (última fecha de consulta: 17 de octubre de dos mil once).

acataba la prohibición contenida en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos según la cual: *“Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”*.

59. Pues bien, en el informe el Grupo señaló que si bien se había encontrado en las autoridades una apertura y un deseo de mejorar el control de las detenciones, persistían dificultades para poner en práctica los medios para combatir la arbitrariedad. Al respecto, citó dos ejemplos: *“la presunción de inocencia que no está expresamente establecida en la legislación, y la figura de la **“flagrancia equiparada” que otorga una suerte de “cheque en blanco” para detener a las personas.**”* En el capítulo relativo a “temas de preocupación” advirtió literalmente lo siguiente:

“[...]

B. Relación entre flagrancia equiparada y detención arbitraria

39. La "flagrancia equiparada" reposa sobre una concepción extensiva del concepto de "flagrancia" que permite detener a una persona no sólo cuando la comisión del delito es actual y en esa circunstancia su autor es descubierto, o cuando el delito acaba de cometerse, sino cuando la persona, durante el período de 72 horas que sigue a la comisión del delito, es sorprendida con objetos, huellas o indicios que revelan que acaba de ejecutar el delito. El delito ha sido cometido y la persona es detenida después de ser descubierta y perseguida. **La consecuencia de la "flagrancia equiparada" es que permite arrestos sin orden judicial sobre la base de simples denuncias o declaraciones testimoniales, tal como el Grupo de Trabajo pudo comprobar en sus entrevistas con numerosos detenidos.** Este supuesto de flagrancia es incompatible con el principio de la presunción de inocencia y genera tanto riesgos de detenciones arbitrarias como de extorsiones.

[...].”

60. Como se puede apreciar, los actores del proceso de reforma constitucional dieron cuenta de este contexto y determinaron limitar la posibilidad de legitimar detenciones no autorizadas judicialmente, bajo la excusa de que se trata de detenciones en flagrancia.
61. A partir de esta reforma, la flagrancia vuelve a aludir a la inmediatez a la que se refería la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus primeras interpretaciones del concepto en la Quinta Época. **Y de esta forma, su significado readquiere un sentido literal y restringido, donde lo que flagra es lo que arde o resplandece como fuego o llama.**¹⁸
62. Un delito flagrante es aquel (y sólo aquel) que brilla a todas luces. Es tan evidente e inconfundible que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de que se está en presencia de una conducta prohibida por la ley. Para reconocerlo *no* se necesita ser juez, perito en derecho o siquiera estar especialmente capacitado: la obviedad inherente a la flagrancia tiene una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta el sujeto aprehensor.
63. Esta nueva interpretación (obligada por la reforma de dos mil ocho) vuelve a dar sentido a la idea de que, ante un delito flagrante, *cualquiera* puede detener al sujeto activo del delito, pues —como se ha insistido— tanto particulares como autoridades pueden apreciar la comisión del delito sin que para ello tenga relevancia si alguno de ellos cuenta con una investidura determinada.

¹⁸ De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo flagrar significa arder o resplandecer como fuego o llama.

64. De este modo, **la flagrancia siempre es una condición que se configura ex ante a la detención**. Esto implica que la policía no tiene facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo o porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito objeto de investigación, si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial. **Tampoco puede detener para investigar**.
65. Tratándose de delitos permanentes, la anterior precisión es especialmente importante. Si la persona no es sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de ello, no es admisible que la autoridad aprehensora detenga, sorprenda al inculcado y después intente justificar esa acción bajo el argumento de que la persona fue detenida mientras cometía el delito. La flagrancia resplandece, no se escudriña.
66. Por otro lado, la referencia a una actitud sospechosa, nerviosa o a cualquier motivo relacionado con la apariencia de una persona, no es una causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto “flagrancia”. Éste siempre tiene implícito un elemento sorpresa (tanto para los particulares que son testigos como para la autoridad aprehensora). En contraste, cuando no hay ese elemento sorpresa —porque ya se ha iniciado una investigación que arroja datos sobre la probable responsabilidad de una persona— la detención requiere estar precedida por el dictado de una orden de aprehensión.
67. A partir de toda la información anterior, podemos identificar cuál es el proceder que, a la luz de la Constitución, debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento,

mediante una denuncia, de que en un determinado lugar se está cometiendo un delito.

68. Aquí sólo interesa analizar la clase de denuncias informales que versan sobre delitos cometidos en flagrancia (es decir, aquellos que se están cometiendo o bien que se acaban de cometer). En otras palabras, sólo nos referiremos a todas aquellas denuncias que no se rinden ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente. Esto, por la urgencia implícita al concepto de flagrancia. Como ejemplos de denuncias informales tenemos: llamadas a la policía (anónimas o no) de particulares que son víctimas o testigos del delito; o aquellas denuncias de testigos o víctimas que se realizan directa y presencialmente ante la policía y que también versan sobre hechos delictivos recién cometidos o que se están cometiendo.
69. Así, los lineamientos generales que han de acatarse son: una vez que la policía recibe información de que en un lugar público **se está cometiendo o se acaba de cometer** un delito, debe actuar de acuerdo a los parámetros previstos constitucionalmente, y fuera de estos casos informar a la autoridad ministerial a efecto de que ésta, con los elementos de información que tenga disponibles, solicite a la autoridad judicial que libere una orden de aprehensión contra quienes sean señalados como probables responsables. El agotamiento de esta acción siempre debe ser favorecido, en virtud del principio de excepcionalidad de las detenciones no autorizadas judicialmente.¹⁹

¹⁹ Al respecto, el artículo 274 del Código Federal de Procedimientos Penales dice:

“Artículo 274. Cuando la Policía Judicial tenga conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio, sólo cuando por las circunstancias del caso, la denuncia no puede ser formulada directamente ante el Ministerio Público, levantará una (sic) acta, de la cual informará inmediatamente al Ministerio Público, en la que consignará:

70. De cualquier forma, por la urgencia que caracteriza a las circunstancias descritas, **no** es necesario que la policía espere a recibir la autorización judicial para desplegarse hasta el lugar de los hechos a fin detener la comisión del delito y aprehender al sujeto activo. Esto, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional, que autoriza al Ministerio Público la expedición de la orden de detención en caso urgente, siempre que se colmen los supuestos establecidos en la Constitución Federal.²⁰
71. Congruente con lo anterior, esta Primera Sala enfatizó: **para que la detención en flagrancia pueda ser válida (es decir, guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que ceñirse al concepto constitucional de flagrancia que fue delimitado en la última reforma a la que se ha venido haciendo referencia;** esto es, tiene que darse alguno de los siguientes supuestos:
- a. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción **se está cometiendo en ese preciso instante**, esto es, en el *iter criminis*.
 - b. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante

I.- El parte de la policía, o en su caso, la denuncia que ante ella se haga, asentando minuciosamente todos los datos proporcionados por uno u otra;

(REFORMADA, G.O. 3 DE MAYO DE 1999)

II.- Las pruebas que suministren las personas que rindan el parte o hagan la denuncia, así como las que se recojan en el lugar de los hechos, ya sea que se refieran al cuerpo del delito o a la probable responsabilidad de sus autores; cómplices o encubridores, y

III.- Las medidas que dictaren para completar la investigación.

²⁰ Esto no torna irrelevante el deber de informar, cuando sea posible, al Ministerio Público de los datos denunciados, pues a partir de ese momento éste puede iniciar una investigación, relacionar datos y empezar a investigar de modo eficiente y veloz.

elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, **apenas en el momento inmediato anterior**, se encontraba cometiendo el delito denunciado.

72. El juez que ratifica una detención en la que no es necesario esperar una orden de aprehensión (flagrancia y caso urgente) debe conducirse de acuerdo con el espíritu de la reforma constitucional a la que hemos hecho referencia. Como se ha dicho, éste consistió en otorgar al gobernado la seguridad de que no será aprehendido a manos del Estado por el sólo hecho de que alguien lo ha señalado como delincuente, sin aportar datos concretos que pudieran corroborar esa acusación.
73. Una vez delimitado el concepto flagrancia obedeció a la intención de favorecer el derecho a la libertad personal. Por tanto, el control judicial *ex post* a la privación de la libertad en flagrancia debe ser especialmente cuidadoso. El juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada. Y debe evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y precisión de los datos aportados por la denuncia.
74. En suma, a juicio de esta Sala, quien afirma la legalidad y constitucionalidad de la detención debe poderla defender ante el juez. El principio de presunción de inocencia se proyecta hasta esta etapa del proceso (hasta la detención) y, por tanto, quien afirma que la persona capturada fue sorprendida en flagrancia, tiene la carga de la prueba.
75. El escrutinio posterior a la detención es de suma importancia, pues el descubrimiento de que se está ante una situación de ilegal

privación de la libertad debe desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad que jurídicamente correspondan.

76. **Ahora bien, el Tribunal Colegiado apreció que se había cumplido con el requisito de “no dilación indebida” de la detención, exigido por la Constitución Federal. Requisito que, a entender de esta Sala, es plenamente exigible para cualquier hipótesis de detención, ya sea la orden de aprehensión, el caso urgente o la flagrancia.**
77. **Así, del régimen general de protección contra detenciones que exige nuestra Constitución podemos derivar un principio de inmediatez, el cual exige que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible. Dicho de otro modo, la persona debe ser puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas.**
78. Pero subsiste una duda legítima que requiere aclaración y que precisamente constituye el aspecto central, el punto fino, del presente asunto: ¿cómo es posible que el juzgador aprecie si tal requisito se cumple? Es decir, **¿cuándo se está frente a una dilación injustificada?**
79. Pues bien, esta Sala considera que no es posible (ni sería adecuado) fijar un determinado número de horas. Fijar una regla así podría abarcar casos en los que las razones que dan lugar a la dilación no son injustificadas. Sin embargo, contrario a lo que argumentó el Tribunal Colegiado, del hecho de que no sea posible ni recomendable adoptar una regla fija, no se sigue que no sea posible adoptar un estándar que posibilite al juez calificar cada caso

concreto de un modo sensible a dos necesidades. Por un lado, la de no dilatar injustificadamente la puesta a disposición de la persona detenida, porque esto da lugar a que se restrinja un derecho tan valioso como el de la libertad personal sin control y vigilancia del Estado. Por otro lado, están las peculiaridades de cada caso en concreto, por ejemplo, la distancia que existe entre el lugar de la detención y la agencia del Ministerio Público.

80. De este modo, el que no pueda existir una regla tasada no quiere decir que no pueda haber un estándar que guíe al juzgador a determinar cuándo está frente a una dilación indebida.
81. **Esta Sala considera que tal circunstancia se actualiza siempre que, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener origen en impedimentos fácticos reales y comprobables (como la distancia que existe entre el lugar de la detención y el lugar de la puesta a disposición). Además, deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Dicho de otro modo, en cuanto sea posible, es necesario llevar a la persona detenida por flagrancia o caso urgente ante el Ministerio Público. Es posible hacer esto a menos que exista un impedimento razonable que no resulte contrario al margen de facultades constitucionales y legales a cargo de la policía.**
82. Lo anterior indica que la policía no puede retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben

desarrollarse las diligencias de investigaciones pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica —de la cual depende su restricción temporal de libertad personal—. Por tanto, la policía no puede simplemente retener a una persona, sin informarlo a la autoridad ministerial, a fin de obtener su confesión o información relacionadas con la investigación que realizan, para inculparlo a él o a otras personas. Esto simplemente obedece al hecho de que los policías no cuentan con la facultad para desahogar una declaración que tenga validez en un proceso penal. En términos estrictamente constitucionales tienen obligación de poner al detenido “sin demora”, retraso injustificado o demora irracional ante el Ministerio Público, en caso de delito flagrante o cuenten con una orden ministerial que justifique la detención por caso urgente, o ante el juez que haya ordenado la aprehensión del detenido. Y, por el contrario, todo inculpado goza del derecho constitucional a la no autoincriminación.

83. Este derecho debe ser protegido de tal modo que, desde el momento de su detención, el inculpado debe estar adecuadamente informado de que tiene el derecho a guardar silencio y que todo lo que diga puede ser usado en su contra en juicio; además debe estar claramente informado de que tiene derecho a un abogado defensor, al cual puede elegir o bien, en caso de no tenerlo, acceder a un defensor de oficio.
84. Así, la detención de una persona no puede estar indefinida; en términos constitucionales requiere que se conozca el estatus en el que se encuentra, de ahí que la Constitución exige que exista un registro de detenidos, a fin de permitir conocer que se encuentra en tales condiciones y esté en posibilidad de ejercer sus derechos constitucionalmente protegidos.

85. Finalmente, los agravios a través de los cuales el quejoso combate la existencia de una interpretación sobre la prohibición de intervención de comunicaciones privadas, resultan inoperantes.²¹ Esto, en virtud de que en realidad no constituyen un caso de interpretación directa.
86. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Primera Sala, podemos recurrir a dos criterios a fin de determinar la existencia de interpretación directa de la Constitución: 1. La que se realiza con el objeto de desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, para lo cual puede atenderse a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el auténtico significado de la normativa, y ello se logra al utilizar los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico. Esto implica que la sentencia del tribunal colegiado de circuito efectivamente debe fijar o explicar el sentido o alcance del contenido de una disposición constitucional; y, 2) además de concurrir las reglas generales de interpretación, pueden tomarse en cuenta otros aspectos de tipo histórico, político, social y económico.

²¹ El quejoso argumentó que las autoridades transgredieron su derecho a la no intervención de comunicaciones privadas —protegido por el artículo 16 constitucional— en tres distintas maneras:

A. Cuando los policías encargados de la investigación de los secuestros interceptaron las comunicaciones sostenidas entre los secuestradores y las familias de las víctimas a fin de negociar.

B. Cuando con posterioridad a la detención de los presuntos secuestradores y sin autorización judicial, el policía de investigación cibernética ***** utilizó un software para intervenir los teléfonos celulares de los implicados; esto, con el fin de conocer el contenido de las llamadas recibidas, perdidas, realizadas, mensajes de salida y de entrada. La información obtenida fue eventualmente utilizada en el juicio.

C. Cuando, sin mediar una intervención judicial, el Ministerio Público local solicitó informes a las empresas de *****.

87. Este criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia de rubro: "INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN."²²
88. Así, como se advierte de la lectura de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, sus afirmaciones en torno a la ausencia de violación a la prohibición de intervención de comunicaciones privadas, no constituyen una interpretación directa del artículo 16 de la Constitución Federal. No explican ni proponen alguna forma de entender el alcance de cualquiera de sus expresiones; ni desarrollan el sentido de esa prohibición. De este modo, dicho órgano colegiado sólo se limitó a afirmar que no existió violación de

²² Novena Época, registro: 164023, instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, materia(s): Constitucional, tesis: 1a./J. 63/2010, página: 329.

Su texto dispone: "En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden detectarse, al menos, dos criterios positivos y cuatro negativos para identificar qué debe entenderse por "interpretación directa" de un precepto constitucional, a saber: en cuanto a los criterios positivos: 1) la interpretación directa de un precepto constitucional con el objeto de desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, para lo cual puede atenderse a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el auténtico significado de la normativa, y ello se logra al utilizar los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico. Esto implica que la sentencia del tribunal colegiado de circuito efectivamente debe fijar o explicar el sentido o alcance del contenido de una disposición constitucional; y, 2) la interpretación directa de normas constitucionales que por sus características especiales y el carácter supremo del órgano que las crea y modifica, además de concurrir las reglas generales de interpretación, pueden tomarse en cuenta otros aspectos de tipo histórico, político, social y económico. En cuanto a los criterios negativos: 1) no se considera interpretación directa si únicamente se hace referencia a un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia en el que se establezca el alcance y sentido de una norma constitucional. En este caso, el tribunal colegiado de circuito no realiza interpretación alguna sino que simplemente refuerza su sentencia con lo dicho por el Alto Tribunal; 2) la sola mención de un precepto constitucional en la sentencia del tribunal colegiado de circuito no constituye una interpretación directa; 3) no puede considerarse que hay interpretación directa si deja de aplicarse o se considera infringida una norma constitucional; y, 4) la petición en abstracto que se le formula a un tribunal colegiado de circuito para que interprete algún precepto constitucional no hace procedente el recurso de revisión si dicha interpretación no se vincula a un acto reclamado."

dicha prohibición, pues a su entender las acciones de intervención realizadas por los policías que condujeron la investigación del caso encontraban sustento en el marco de facultades de que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede a la autoridades de procuración e investigación.

89. Así, en virtud de que tales agravios no combaten una interpretación constitucional, no pueden formar parte de la materia propia de la revisión. No existiendo queja deficiente que suplir, devienen inoperantes.

VII. DECISIÓN

90. Finalmente, al tener clara cuál es la correcta interpretación del principio de inmediatez que se desprende de los términos “sin dilación” y “sin demora” —previstos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 constitucional— resulta evidente que el Tribunal Colegiado se apartó de la misma, por considerar que no existían parámetros para evaluar la razonabilidad de la temporalidad que debe mediar entre la detención y la puesta a disposición de la persona ante la autoridad ministerial.
91. Así, es claro que la interpretación aquí vertida debe tener un impacto en la revisión de dichos planteamientos de legalidad. Es por ello que, a juicio de esta Sala, deben devolverse los autos relativos al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Esto para que, partiendo de la interpretación constitucional expuesta en la presente ejecutoria, se avoque de nueva cuenta al estudio de la legalidad de la resolución dictada por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el veinte de agosto de dos mil diez dictada en el toca ***** —acto

reclamado en el juicio constitucional del que deriva el presente recurso de revisión—.

92. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

RESUELVE:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Devuélvanse los autos relativos al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para los efectos precisados en la parte final del último apartado de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen; y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, (Ponente), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Firman el Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

PONENTE:

MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA:**

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.